

Herrera Martínez, Edith, "Los caminos de la resistencia: de la Montaña a la Costa Chica", *La Jornada del Campo. Suplemento informativo de La Jornada*, Núm. 67, Distrito Federal, México, Desarrollo de Medios S.A. de C.V. (DEMOS), 20 de abril de 2013.

Consultado en:

<http://www.jornada.unam.mx/2013/04/20/cam-caminos.html>

Fecha de consulta: 13/08/2014

**Edith Herrera Martínez** Indígena mixteca, antropóloga social de la UAM-Iztapalapa, miembro de la campaña contra las mineras en territorio comunitario donde opera la CRAC-Policía Comunitaria

Nuestra montaña de Guerrero es conocida tradicionalmente por la marginación que se vive a diario; por los altos índices de migración – jornaleros que van al norte del país o a Estados Unidos–, y por los constantes atropellos y violaciones a derechos humanos e indígenas. Pero ahora



también es conocida por megaproyectos que generan despojo, violación y hasta la muerte, pues la minería es un atentado contra la vida y el territorio.

**FOTO:** Tomada del blog No minas en la Montaña de Guerrero

Como lo explica el abogado Jorge Peláez (miembro del colectivo de abogados RADAR), “la Montaña de Guerrero no es ajena a los grandes conflictos que vive el país derivado de la expansión de los megaproyectos mineros. Como es conocido, debido a los altos precios del metal, al agotamiento de los minerales metálicos en vetas, y al desarrollo de nuevas tecnologías de extracción, la minería a gran escala (de tajo a cielo abierto y de corte y relleno) se ha extendido por todo el mundo. Lo anterior ha sido particularmente acentuado en los países del Sur, donde nuestros gobiernos, con el discurso del incentivo al desarrollo y a la

inversión, han abierto puertas y ventanas a este tipo de minería, prohibida en muchos países del Norte producto de los grandes pasivos ambientales que ocasiona (...)

**“Que si queremos desarrollo tenemos que vender nuestros cerros, ríos y montañas”.** En nuestro territorio, la amenaza empezó a hacerse sentir cuando, en noviembre de 2010, se detectó la presencia de helicópteros sobrevolando la zona de la Montaña en las comunidades de Acatepec, Iliatenco, Tlacoapa y San Luis Acatlán. Éstas llevaban consigo largos tubos y volaron a muy baja altura, lo que alertó a la gente de las comunidades, que de inmediato dieron aviso a las autoridades comunitarias, a las comandancias y casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Poco después, se presentaron representantes de la empresa CamSim Minas a la casa de justicia de San Luis Acatlán (CRAC) para solicitar que la policía resguardara su equipo y sus vehículos, situación que ocasionó dudas. La CRAC se dio cuenta que era gente de una empresa privada, que llevaba consigo un oficio donde se informaba a la CRAC que estarían explorando el territorio comunitario, ya que contaban con la autorización de los gobiernos estatal y federal en torno a una concesión minera llamada La Diana, una de las que se registran sobre el territorio comunitario. Estas concesiones habían sido otorgadas sin consultar a los pueblos indígenas que han habitado históricamente la región, lo que generó una situación de alarma bien justificada.

De 2005 a 2010 cerca de 200 mil hectáreas del territorio indígena de la región Costa-Montaña del estado han sido entregadas por el gobierno federal a empresas extranjeras, por medio de concesiones de 50 años, para que realicen actividades de exploración y explotación minera, sin tomar en cuenta el derecho al territorio y a la consulta de los pueblos indígenas, según ha denunciado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.



**Se sabe que las concesiones**

FOTO: Archivo

**existentes son:** Corazón de Tinieblas (perteneciente a la inglesa Holdschild Mining), La Diana y San Javier (perteneciente a la canadiense CamSim) y La Faraona Goliat (subdivida en lotes perteneciente a la mexicana Grupo Goliat), proyectos con miras a explotar oro, plata y cobre principalmente. Se sabe que hay más proyectos mineros por descubrirse, por lo que estamos en permanente alerta.

En febrero de este año, Enrique Castro Soto, secretario de Desarrollo Económico en Guerrero, declaró a *La Jornada* edición Guerrero que la actividad minera en la entidad para 2013 será “bastante interesante” y se espera incrementar la producción, pues existen 600 concesiones de las cuales solamente cinco están operando. Con esto, nos damos cuenta que el gobierno hará todo lo posible para instalarse en las zonas concesionadas, sin importar que los pueblos digan ¡No!

Otra vez, las comunidades, que no fueron consultadas, no estaban listas ni informadas de lo que implicaban las mineras. La realidad era de un profundo desconocimiento respecto de estos megaproyectos, justificados por el propio gobierno estatal con un falso discurso de “alternativa a la marginación” que se vive en las comunidades nahuas, *na savi, me phaa* y mestizas de la región.

Cuando se informó y se conocieron realmente los impactos de estos megaproyectos, la gente mostró preocupación, pero sobre todo coraje para defender su territorio. Comenzó a generarse un frente de varios actores de la región: pueblos, autoridades, profesionistas, estudiantes de universidades; entidades como Tlachinollan, Universidad del Sur (Unisur), Universidad Pedagógica Nacional (UPN), CRAC-PC, y las radios comunitarias de Espino Blanco (La Voz de los Pueblos y La Voz de la Costa Chica) en San Luis Acatlán pertenecientes a la CRAC. Todos movilizados informaron y alertaron a la comunidad.

Una de las acciones inmediatas que fueron tomadas en respuesta a la entrada de las mineras, y que se realizó con el apoyo de Tlachinollan, fue levantar las actas de las asambleas donde se rechazó la actividad minera en las comunidades, para posteriormente registrarlas en el Registro Agrario Nacional (RAN).

**De acuerdo con el abogado Peláez, con ello se intentaba blindar la superficie a los intentos de sobornos** y cooptación por parte de las mineras. Sin los derechos superficiales, el mineral no podría ser extraído. Esto da a las comunidades un papel considerable: el poder de escoger por su cuenta lo que pasa sobre su propio territorio. Y hace que la labor de información de las comunidades resulte imprescindible.

Todo este proceso de lucha, defensa, movilización de los pueblos ha generado muchos inconvenientes al gobierno, quien sirve de gestor para la instalación de las mineras.

Ello llevó al lanzamiento de una campaña de división, cooptación y engaño, a partir de promover los supuestos “beneficios” de la minería, por medio de visitas, reuniones a puerta cerrada y un proyecto llamado Minería de Gran Visión, promovido por parte del supuesto “asesor” del gobernador en materia ambiental (Leonel Lozano), lo que podría describirse como una contra-campaña de información. Hasta el momento, esta estrategia ha fracasado,

gracias a que los pueblos se han mantenido alertas y a la labor continua de promoción por parte de los diversos actores en la región. Pero sigue siendo una amenaza.

Poco tiempo después, se desplegó una nueva estrategia, mediante un proyecto para declarar a una gran parte de la Montaña de Guerrero como “reserva de la biósfera”, que supuestamente emanaba de una petición de los propios pueblos por medio de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), ubicada en La Ciénega, municipio de Malinaltepec.

**Este proyecto parecía en principio una herramienta para la protección de los recursos y del territorio de las comunidades.** Sin embargo, a partir de un análisis más profundo y del conocimiento de la experiencia de otros pueblos y regiones, los propios pueblos y varios actores movilizados de la región lograron desenmascarar esta maniobra para el despojo territorial a los pueblos indígenas. Así, vemos que al no encontrar cómo abrirse el paso hasta el territorio comunitario, se aprovechan de otros recursos, medios, leyes y programas ya existentes en nuestro país que sirven para dar entrada a la privatización de las tierras.

Queda claro que en este proceso las estrategias que el gobierno ha utilizado no tienen nada que ver con una confrontación directa, a diferencia de muchos procesos de lucha en el país. Por ello, somos conscientes de que tenemos que ser cautelosos.

Guerrero cuenta con una fuerte tradición histórica de resistencia y de lucha. No es casual la presencia de actores como la CRAC que no cederán ante los intereses ambiciosos y voraces de los empresarios. Sabemos que están en juego mucho dinero, recursos e intereses, por lo cual las compañías mantendrán vivas sus pretensiones. Sin duda, la CRAC ha venido a representar uno de los principales obstáculos para las mineras. Al no poder comprarla ni cooptarla, lo que hacen es ir creando poco a poco un clima de desestabilización interna, una pelea interna, una división de pueblos, actores y discursos. Eso es lo que hemos vivido durante los meses recientes.

Es importante y necesario hablar del desarrollo que nosotros como pueblos indígenas queremos. Que este término no se vuelva sinónimo de pérdida y despojo. Hagámoslo nuestro, forjémoslo. No se puede reducir a infraestructuras, pavimentaciones, construcciones muchas veces ajenas a nuestra cosmovisión. Queremos desarrollo, pero uno que reconozca el sentido

de ser hijos de esta madre tierra, no queremos desarrollo si eso implica vender nuestros cerros, ríos, montañas... y hasta nuestra dignidad. Esto lo tenemos bien claro.